

Enero 23 de 1947 (Mañana)

84ª REUNION — 26ª SESION EXTRAORDINARIA

Presidencia del doctor Ricardo C. Guardo y señor Silverio Pontieri

Secretarios: doctores Leonidas Zavalla Carbó y Rafael V. González

DIPUTADOS PRESENTES:

Alvarez, Juan Daniel
Alvarez, Néstor
Alvarez Pereyra, Manuel
Alvarez Vocos, Enrique
Allub, Rosendo
Antille, Diógenes C.
Aráoz, Ricardo E.
Arévalo Cabeza, Jabel
Argaña, José M.
Arias, José
Ayala López Torres, Francisco
Bagnasco, Vicente
Balbin, Ricardo
Barreiro, Carmelo
Baulina, Angel V.
Benítez, Antonio J.
Bertini, Amadeo
Braga, Juan Carlos
Brugnerotto, Juan N. D.
Busaniche, Julio J.
Calcagno, Alfredo D.
Cámara, Guillermo F.
Camus, Eloy P.
Candioti, Alberto M.
Casal, Raúl M.
Casas Noblega, Armando
Cleve, Ernesto
Colom, Eduardo
Cooke, John William
Córdova, J. Salvador
Corvalán, Luciano R.
Cufre, Orlando H.
Curchod, Amado J.
Degreef, Juan Ramón
De la Torre, Juan
Del Carril, Emilio Donato
Del Mazo, Gabriel
Dellepiane, Luis
Díaz Coladriero, Justo

Díaz de Vivar, Joaquín
Díaz, Manuel M.
Dri, Roberto
Errecart, Juan A.
Fajre, José Benito
Fernández, Baltasar S.
Fernández, Hernán S.
Ferrando, Manuel P.
Ferrer, Modesto
Frogossi, Luis J.
Frondizi, Arturo
Galvagni, Saverio M.
Garaguso, Bernardino Hipólito
Garay, Marcelino S.
García, Manuel
García Quiroga, Alejandro
Gerleke, Carlos Gustavo
González Funes, Tomás
Graña Etcheverry, Manuel
Guardo, Ricardo C.
Klix López, Guillermo
Lareo, Ricardo
Lascliar, Guillermo F.
Letamendi, Balbino (h.)
Liceaga, Félix J.
López Serrot, Oscar
Mac Kay, Luis R.
Malneri, D. Jacinto
Malcock, José Enrique
Mántaras, Manuel J.
Mariategui, Angel S.
Martínez Guerrero, Guillermo
Martínez Luque, Enrique
Messina, Humberto
Montes de Oca, Carlos
Montiel, Alcides E.
Moreno, José Luis
Mujica, Rodolfo
Obeld, Leonardo
Orozco, Modesto V.

Osnalde, Rafael
Otonello, Benito J.
Pastor, Reynaldo A.
Peña Guzmán, Solano
Perea, Pedro J.
Petruzzi, Miguel
Pomar, Gregorio
Pontieri, Silverio
Pueyrredón Horacio Honorio
Baña, Eduardo Antonio
Ravignani, Emilio
Reyes, Cipriano
Reynés, Leandro R.
Rodríguez de la Torre, Raúl
Rodríguez, Nerio M.
Rojas, Absalón
Rojas, Nerio
Rossi, José
Rouggier, Valerio S.
Rubino, Sidney Nicolás
Rumbo, Eduardo I.
San Millán, Ricardo Antonio
Santander, Silvano
Saravia, Teodoro S.
Sarmiento, Manuel
Sarraute, José Roberto
Sobral, Antonio
Sustalta Secher, Héctor
Tejada, Ramón Washington
Tesorieri, José V.
Tommasi, Victorio M.
Toro, Ricardo
Uranga, Raúl L.
Urdapilleta, Oscar C.
Valdez, Celestino
Velloso Colombres, Manuel F.
Vergara, Amado
Villafañe, José María
Visca, José Emilio
Zanoni, Pedro P.

AUSENTES. CON LICENCIA:

Alvarez Pérez, Vicente
Andreotti, Antonio
Ayerbe, Lázaro Balbino
Beretta, Eduardo
Bustos Fierro, Raúl
Cumineffi Correa, Alcides D.
Dufau, Juan Adolfo
Ianspolsky, Angel
Jofré, Hernán R.
Kees, Gaspar
Lencinas, José R.
Marotta, José
Mendiando, F. Daniel
Palacio, Ernesto
Pasquini, José P. D.
Pirani, Antonio S.
Polizzi, Juan
Ponce, Angel L.
Repetto, Agustín
Ricagno, Roberto
Rodríguez, Manuel
Sammartino, Ernesto E.
Solana, Emilio
Sorgentini, María Alberto
Vanasco, Julio A.
Vischi, Albino
Zara, Edmundo Leopoldo
Zinny, Mario

AUSENTES. SIN AVISO

Albrieu, Oscar E.
Bonazzola, Romeo E.
Boullosa, Emilio M.
Cámpora, Héctor J.
Decker, Rodolfo A.
Giménez Vargas, Francisco
Guillot, César Joaquín
Masset Iturraspe, Mario
Noriega, Juan J.
Pérez de la Torre, Horacio

SUMARIO

1.—Manifestaciones en minoría.

2.—Asuntos entrados:

I.—Peticiones particulares.

II.—Proyecto de ley del señor diputado Pomar y otros: pensión al ex diputado nacional don Justo José Soler Urquiza.

III.—Proyecto de ley del señor diputado Balbin: incorporación al régimen de las leyes de obras públicas 12.576 y 12.815 de un crédito para la Biblioteca Popular de La Prida, provincia de Buenos Aires.

IV.—Proyecto de ley del señor diputado Sarmiento y otros: creación y organización del Consejo Nacional de la Tradición.

V.—Proyecto de ley de los señores diputados Brugnerotto y Díaz: subsidio a los damnificados por las inundaciones producidas por el desbordamiento del arroyo Tortugas, en la localidad de Tortugas, provincia de Santa Fe.

VI.—Proyectos de resolución y de declaración en la mesa de la Honorable Cámara.

1.—Del señor diputado Reynés: envío de una embajada de legisladores a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas.

2.—Del señor diputado **Reynés**: conformidad por el establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas.

3.—De los señores diputados **Brugnerotto** y **Díaz**: sobre inclusión en las sesiones extraordinarias del proyecto de ley de subsidios a los damnificados por las inundaciones provocadas por el desbordamiento del arroyo Tortugas, en la localidad de Tortugas, provincia de Santa Fe.

3.—Concédese licencia para faltar a sesiones a los señores diputados: **Bustos Fierro**, **Lencinas**, **Palacio**, **Pirani** y **Alvarez Pérez**.

4.—Continúa la consideración del proyecto de resolución del señor diputado **Rubino** sobre inclusión en las sesiones extraordinarias del proyecto de ley de intervención a la provincia de Santa Fe.

5.—Manifestaciones del señor diputado **Fronzizi** referentes a publicidad de las negociaciones con la misión financiera y comercial británica, y a pronto despacho de proyectos de resolución sobre exención de derechos de importación a las empresas ferroviarias y nacionalización de los servicios ferroviarios.

6.—Indicación del señor diputado **Santander** de pronto despacho del proyecto de resolución sobre nombramiento de comisión investigadora de la Sección Especial de la Policía de la Capital.

7.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley sobre modificación de disposiciones referentes a impuesto a los réditos y a impuesto a las ganancias eventuales. Se sanciona.

8.—Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley sobre modificación del régimen de distribución de lo recaudado en concepto de impuesto a los réditos.

9.—Apéndice:

—Inserciones.

—En Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de enero de 1947, siendo las 9:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Raña. — Señor presidente: hago indicación de esperar media hora más.

Sr. Presidente (Pontieri). — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

2

ASUNTOS ENTRADOS

—A las 9 y 30:

Sr. Presidente (Pontieri). — Queda abierta la sesión con la presencia de 81 señores diputados en el recinto.

Por Secretaría se dará cuenta de los asuntos entrados.

I

Peticiones particulares

El Centro de Ingenieros Químicos, de San Juan, expresa su apoyo al petitorio presentado por la Asociación de Técnicos Industriales, en el que se formulan observaciones al decreto ley 17.946 de 1944 y su complementario 8.636 de 1946. (A la Comisión Especial Revisora de Decretos Leyes.)

—La señora **Julieta Durán** de **Mirant Borde** solicita se le acuerde los beneficios que otorga la ley 12.821 de pensiones graciabiles. (A la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.)

SOLICITUDES DE SUBSIDIO:

Asilo San Ildefonso, de la Capital Federal. (A las comisiones de Obras Públicas —especializada— y de Presupuesto y Hacienda.)

—Taller Asilo de la Sagrada Familia, Córdoba. (A las comisiones de Asistencia y Previsión Social —especializada— y de Presupuesto y Hacienda.)

SOLICITUDES DE PENSIÓN:

Julio Reyes; **Juan Miguel Priori**. (A la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.)

II

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados. etc.

Artículo 1º — Acuérdase una pensión de quinientos pesos moneda nacional (\$ 500 m/n.) al señor **Justo José Soler Urquiza**, ex diputado nacional, quien desempeñara su cargo por el distrito electoral de Entre Ríos, en el período comprendido entre el 1º de mayo de 1922 al 30 de abril de 1924.

Art. 2º — El gasto que demande el cumplimiento de esta ley se tomará de rentas generales hasta tanto se incluya en el presupuesto general de la Nación.

Art. 3º — Comuníquese, etc.

Gregorio Pomar. — **Silvano Santander.** — **José Benito Fajre.** — **Juan A. Errecart.**

repudio de todos los hombres libres. A pesar del tiempo transcurrido, la comisión a la cual ha sido girado el proyecto, que involucraba el propósito de llegar a la disolución de dicho organismo, no se ha pronunciado.

En el día de la fecha un periódico autorizado de esta Capital actualiza el problema, puesto que denuncia concretamente que la policía de la ciudad de La Plata —la ciudad universitaria—, está torturando a jóvenes estudiantes argentinos; denuncia que deben escuchar los hombres que gobiernan al país y a la provincia de Buenos Aires, porque eso constituye una vergüenza. No es posible que a esta altura de la vida civilizada del país se pueda admitir que una institución policial, cuya actuación se agrava por el hecho de que es presidida por un coronel de la Nación, cometa hechos de esta naturaleza. Esto es humillante y debe merecer nuestra más enérgica reprobación.

Por estas razones, señor presidente, me permito conitar a la comisión para que se pronuncie en la iniciativa que acabo de recordar.

Sr. Presidente (Guardo). — La comisión tendrá en cuenta las palabras del señor diputado por Entre Ríos.

No habiendo oradores anotados para la media hora de consultas, se pasará al orden del día.

7

IMPUESTO A LOS REDITOS E IMPUESTO A LAS GANANCIAS EVENTUALES

(Orden del día número 221).

Honorable Cámara:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha tomado en consideración el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre modificaciones de varias disposiciones referentes al impuesto a los réditos, al impuesto a las ganancias eventuales y el mensaje aclaratorio del mismo proyecto; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación substituyendo la segunda parte, del punto 9, del artículo 29 del proyecto, por la siguiente disposición:

«Artículo 113. — Las nuevas disposiciones sobre prescripción no se aplicarán a las prescripciones que, de acuerdo con las normas anteriores, se hayan operado antes de la promulgación del decreto ley 14.341/46 (ley 11.683, texto nuevo). En cuanto a las prescripciones en curso al promulgarse el decreto ley mencionado, su punto de partida se trasladará en todos los casos al 1º de enero siguiente al hecho u omisión que dió nacimiento a la acción o facultad respectiva, aplicándose a los términos de prescripción las normas siguientes:

- «a) Si se mantienen o alargan los plazos, se aplicarán las nuevas disposiciones;
- «b) Si se abrevian los plazos, se aplicarán las disposiciones anteriores, pero sin que el término a correr pueda sobrepasar, desde el 1º de enero de 1947, los plazos de prescripción que el citado decreto ley establece.»

Sala de la comisión, 11 de diciembre de 1946.

Juan Ramón Degreef. — Hernán S. Fernández. — Rosendo Allub. — Jabel Arévalo Cabeza. — Antonio J. Benítez. — Raúl Bustos Fierro. — Héctor J. Cámpora. — Armando Casas Noblega. — Angel S. Mariategui. — Manuel Sarmiento. — José V. Tesorieri. — Celestino Valdez. — José Emilio Visca.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Modifícanse, en la forma que a continuación se indica, los artículos de la ley 11.682, texto nuevo (decreto ley 14.338/46), que en cada caso se mencionan:

- 1) Substitúyese el primer párrafo del artículo 10 por el siguiente:

«Se presume de derecho que las compañías no constituidas en el país que se ocupan en el negocio de transportes entre la República y países extranjeros, obtienen réditos netos de fuente argentina, iguales al 10 % del importe bruto de los fletes por pasajes y cargas correspondientes a esos transportes.»

- 2) Agrégase al artículo 12 el siguiente párrafo final:

«En el caso de cesiones a compañías del extranjero —reaseguro y/o retrocesiones— el cedente retendrá e ingresará en concepto de impuesto el 4 % de las primas cedidas netas de anulaciones. Tal pago tendrá carácter de definitivo.»

- 3) Substitúyese el artículo 13 por el siguiente:

«Se presume de derecho que el 50 % del precio abonado a los productores, distribuidores o intermediarios de películas cinematográficas extranjeras, por la explotación de las mismas en el país, constituye rédito neto de fuente argentina. Esta disposición también rige cuando el precio se abone en forma de regalía.»

- 4) Agrégase al artículo 19 el siguiente inciso:

«k) Los réditos de títulos, acciones, cédulas, bonos y valores similares emitidos por en-

tidades oficiales o mixtas de la Nación, provincias o municipalidades, cuando exista una ley general o especial que así lo disponga.

5) Substitúyese el artículo 20 por el siguiente:

«Las personas de existencia visible residentes en la República tendrán derecho a deducir de sus réditos, en concepto de renta no imponible, los siguientes importes:

- 1º Cuando sólo obtengan réditos de 3ª y 4ª categorías, \$ 4.800 m/n. anuales;
- 2º Cuando sólo obtengan réditos de 1ª y 2ª categorías, \$ 2.400 m/n. anuales;
- 3º Cuando además de los réditos de 3ª y 4ª categorías, obtengan otros de 1ª ó 2ª, las deducciones se computarán en la siguiente forma:

- a) Si el importe que resulte de sumar o compensar los réditos o pérdidas de 3ª y 4ª categorías fuese quebrantado, o beneficio menor o igual a \$ 2.400 moneda nacional, se deducirá como renta no imponible \$ 2.400 moneda nacional;
- b) Si de la suma o compensación del inciso a) resultase un rédito neto mayor de \$ 2.400 m/n., pero menor de \$ 4.800 m/n., deberá computarse como renta no imponible un importe igual al monto de dicho rédito neto;
- c) Si de la suma o compensación del inciso a) resultase un rédito neto igual o mayor de \$ 4.800 m/n., se deducirá como renta no imponible \$ 4.800 moneda nacional.

«Los mínimos no imponibles que se fijan en las precedentes disposiciones de este artículo (incisos 1º, 2º y 3º), se elevarán en \$ 1.200 moneda nacional anuales para las personas de existencia visible, que tengan cargas de familia.

«Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes residentes en el país, que obtengan réditos comprendidos en el artículo 63, superiores a \$ 6.000 m/n. o \$ 4.800 moneda nacional (según que tengan o no personas a su cargo), tendrán derecho a una deducción adicional igual al excedente de dichas sumas y hasta un máximo de \$ 1.800 moneda nacional anuales.

«Los contribuyentes que presenten balance en forma comercial deducirán como renta no imponible la que corresponda a la naturaleza de sus réditos.»

6) Substitúyese el artículo 21 por el siguiente:

«Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus réditos las siguientes sumas en concepto de cargas de familia, siempre que las personas que se indican residan en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año entradas netas superiores a \$ 1.200 m/n., cualquiera sea su origen y

estén o no sujetas al impuesto:

- a) Pesos 1.200 moneda nacional anuales por el cónyuge;
- b) Pesos 900 moneda nacional anuales por cada descendiente en línea recta varón (hijo, nieto, bisnieto) e hijastro, menor de edad o incapacitado para el trabajo;
- c) Pesos 900 moneda nacional anuales por cada descendiente en línea recta mujer (hija, nieta, bisnieta) e hijastra;
- d) Pesos 900 moneda nacional anuales por cada ascendiente (padre, abuelo, bisabuelo);
- e) Pesos 900 moneda nacional anuales por cada hermano varón menor de edad o incapacitado para el trabajo, y hermana, cualquiera sea su edad;
- f) Pesos 900 moneda nacional anuales por el suegro o suegra;
- g) Pesos 900 moneda nacional anuales por cada yerno menor de edad o incapacitado para el trabajo, y nuera, cualquiera sea su edad.

«La deducción por cargas de familia, sólo podrá efectuarla el pariente más cercano que tenga réditos imponibles. Cuando existan varios parientes de igual grado, a cuyo cargo se halle una misma persona, deberá distribuirse proporcionalmente al número de aquéllos, la deducción de los importes indicados.»

7) Agrégase al artículo 30 el siguiente párrafo:

«A tal efecto los réditos del menor se adicionarán a los réditos propios del usufructuario.»

8) Substitúyese el inciso c) del artículo 49 por siguiente:

- c) Las participaciones en los beneficios de cualquier clase de sociedades, que tengan por objeto la realización de algún lucro y siempre que la actividad que desarrollen se encuentre en las condiciones exigidas por el artículo 3º.

9) Suprímense los incisos c) y d) del artículo 56, los que se reemplazan por las siguientes disposiciones:

- c) Las asociaciones civiles y demás entidades a que se refiere el segundo apartado del inciso f) del artículo 19, en cuanto no correspondía por esta ley otro tratamiento impositivo.

«Las sociedades de capital, cualquiera sea su denominación, constituidas en el extranjero, que tengan en el país un establecimiento comercial, industrial, agropecuario, minero o de otro tipo, organizado en forma de empresa estable, abonarán también la tasa del 15 %; cuando dichas utilidades se giren o acrediten al exterior, corresponderá retener e ingresar un 5 % complementario sobre las mismas, el que revestirá —juntamente con el 15 % antes

citado— carácter de definitivo y se abonará sin perjuicio del recargo por ausentismo que pueda corresponder sobre el total de impuesto resultante (15 % y 5 %), de acuerdo con lo que dispone el artículo 26 de la presente ley.

«La dirección podrá considerar que las sumas o parte de ellas giradas o acreditadas al exterior por diversos conceptos (destinadas según la sociedad a pagar el saldo acreedor de la casa matriz, abonar mercaderías, servicios o préstamos u otros conceptos), constituyen en realidad utilidades y por consiguiente deben tributar el 5 % de impuesto complementario antes citado.»

- 10) Substitúyese el último párrafo del artículo 57, por las siguientes disposiciones:

«Cuando se pague o acredite a sociedades de capital constituidas en el exterior o a sus apoderados, agentes, representantes o cualquier otro mandatario en el país, réditos de cualquier categoría excluidas las utilidades a que se refieren los dos últimos párrafos del artículo anterior, corresponderá que el que los pague o acredite retenga e ingrese a la dirección el 20 % de esas sumas. Este pago reviste el carácter de definitivo y se abonará sin perjuicio del recargo por ausentismo que pueda corresponder.»

- 11) Substitúyese el artículo 58 por el siguiente:

«Cuando las sociedades anónimas u otras sociedades de capital distribuyan dividendos en un monto superior a la utilidad impositiva total del ejercicio fiscal —incluidos dividendos de otras entidades— deberán abonar sobre esta diferencia la tasa definitiva del 15 por ciento.

«Cuando el resultado del balance impositivo arrojara quebranto, la sociedad abonará con carácter de definitivo el 15 % sobre el importe que distribuya en concepto de dividendos o utilidades.

«El impuesto que estas sociedades tengan pagado sobre las reservas constituidas antes de la vigencia de estas disposiciones —calculadas conforme con lo establecido por el decreto del Poder Ejecutivo 2.711 del 14 de julio de 1943 y la tasa que corresponda sobre las reservas no distribuidas por los ejercicios cerrados dentro del régimen del decreto 18.229/43— se considerará como ingreso a cuenta del impuesto que deben abonar sobre el excedente de dividendos a que se refieren los párrafos anteriores.

«Los dividendos que se pongan a disposición de los accionistas después de los 120 días de la fecha de cierre de un ejercicio, se considerarán como pertenecientes al ejercicio en curso, acumulándose a los que se distribuyan al cierre de este último. Sobre aquellos dividendos, la sociedad deberá ingresar la tasa del 15 % de impuesto, que se considerará como pago a cuenta del impuesto que en definitiva deba satisfacerse a fin del ejercicio. La dirección podrá eximir a la sociedad —total o parcialmente— de dicho ingreso, cuando se

demuestre que los dividendos distribuidos serán cubiertos por las utilidades impositivas del ejercicio o en el caso de que estén integrados con reservas de años anteriores a 1946, sobre las que se hayan efectuado pagos a cuenta conforme al régimen de los decretos 2.711/43 y 18.229/43.

«Cuando el excedente de los dividendos que se distribuyan corresponda a reservas constituidas en ejercicios cerrados a partir del año 1946, no se efectuará deducción alguna en concepto de pago a cuenta del impuesto, no obstante que dichas utilidades tributaron en el año de su constitución la tasa del 15 por ciento.

«En los casos que la sociedad se hubiera comprometido a abonar como dividendo un porcentaje mínimo referido al valor nominal de la acción —caso de acciones preferidas— podrá recuperar el impuesto que recaerá sobre las utilidades que reparte a los titulares de esta categoría de valores, deduciendo un 15 % del importe del interés que se obligó a satisfacer.»

- 12) Substitúyese el párrafo final del artículo 61 por el siguiente:

«Entiéndese por «tasa general», el porcentaje que resulta de relacionar el total de impuesto que debe pagar el contribuyente —aplicando las tasas básicas y adicional del artículo 84— con el monto de las rentas netas (sin tener en cuenta los quebrantos sufridos en cualquier categoría, ni las deducciones que recaen sobre el conjunto de dichas rentas, como: quebrantos de años anteriores, intereses, primas de seguros, mínimo no imponible cargas de familia y otras).»

Agrégase, además, al artículo 61, el siguiente párrafo:

«Los accionistas de las compañías nacionales de seguros declararán como dividendo percibido el monto neto cobrado por tal concepto (excluido el gravamen del 12 % establecido por el decreto ley 15.345/46).»

- 13) Substitúyese el artículo 62 por el siguiente:

«Las sociedades anónimas y demás entidades de capital que hubieran percibido dividendos de acciones de otras sociedades con el impuesto del 15 % pago, deducirán del gravamen que les corresponda tributar hasta un 15 % de tales dividendos incluidos en su balance impositivo.

«Si el dividendo percibido por la sociedad correspondiera a utilidades de ejercicios que abarcan parte de los años 1945 y 1946, sólo podrá deducirse hasta el importe que resulte de aplicar la tasa promedio abonada por la entidad pagadora. Sobre el monto de la renta percibida, cuando correspondiera a un ejercicio cerrado en el año 1945, se computará como pago a cuenta hasta un 10 % del dividendo percibido.

«En ningún caso el importe a considerar como pago a cuenta —de acuerdo con lo dispues-

to en los dos párrafos anteriores— podrá superar el impuesto que corresponda abonar a la sociedad sobre la utilidad impositiva o sobre los dividendos distribuidos cuando éstos sean mayores.

Si la distribución se hubiere efectuado conforme con el régimen del decreto ley 18.229/43 (antes del 29 de mayo de 1946), se computará el impuesto que se ha retenido efectivamente.

Cuando una sociedad anónima u otra entidad de capital hubiera obtenido beneficios alcanzados por el impuesto a las ganancias eventuales, corresponderá que excluya los mismos de la utilidad impositiva. Asimismo —y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 58— corresponderá que la sociedad excluya del monto de los dividendos distribuidos la parte de los mismos integrada con utilidades del ejercicio alcanzados por el impuesto a las ganancias eventuales.

14) Agrégase al artículo 65, el siguiente inciso:

1º Las remuneraciones o sueldos que se abonan a miembros de directorios, consejos u otros organismos directivos que actúen en el extranjero y los honorarios u otras remuneraciones pagadas por asesoramiento técnico-financiero o de otra índole, prestado desde el exterior. Sobre estos importes corresponderá que la persona que los pague o acredite, retenga e ingrese el 20 % con carácter único y definitivo.

15) Suprímese el inciso h) del artículo 69.

16) Substitúyese el párrafo 2º y el 5º y 6º del artículo 72, por los siguientes:

El importe a deducir será el que surja de aplicar sobre la utilidad comercial del ejercicio, 2 % —hasta integrar el 10 % del capital social— y en cuanto efectivamente se contabilice como reserva legal.

Cuando leyes especiales dispongan que el fondo de reserva legal debe constituirse en una forma distinta a la fijada por el Código de Comercio, la dirección podrá admitir la deducción anual de un porcentaje diferente al establecido en el presente artículo.

17) Agrégase lo siguiente al final del artículo 86:

Cuando a partir del 28 de mayo de 1946 se hubiere puesto a disposición de los accionistas dividendos o utilidades correspondientes a ejercicios cerrados en el año 1945, la sociedad abonará el 10 % sobre la utilidad imponible de dicho ejercicio. En estos casos, la parte del gravamen correspondiente a las utilidades no distribuidas se considerarán como pago a cuenta de los dividendos a distribuir en años posteriores (régimen del decreto ley 18.229/43), y los accionistas, por su parte, computarán como pago a cuenta en la declaración jurada de 1946 hasta un 10 % de los dividendos imponibles percibidos en el transcurso de dicho año, siguiendo a tal fin el sistema establecido por el artículo 61.

Cuando se trate de ejercicios que abarquen parte de los años 1945 y 1946 y a la fecha citada —29 de mayo de 1946— no se hubiere puesto a disposición de los accionistas los dividendos o utilidades, el impuesto satisfecho por la sociedad sobre el beneficio imponible del ejercicio (10 % y 15 % por la parte de 1945 y 1946, respectivamente), reviste carácter de definitivo.

Art. 2º — Modifícanse, en la forma que a continuación se indica, los artículos de la ley 11.683, texto nuevo (decreto ley 14.341/46), que en cada caso se mencionan.

1) Substitúyese el inciso 5º del artículo 16, por el siguiente:

5º) Los esposos por sus réditos propios, entendiéndose por tales con prescindencia del carácter ganancial que el Código Civil asigna a las rentas de los cónyuges, los réditos producidos por los bienes propios o por la actividad personal de cada esposo, los obtenidos por la explotación de los bienes adquiridos con el producto de la actividad personal de la esposa, y, en general, aquellos de que cada cual tiene la facultad de disponer de acuerdo con el derecho civil; con la salvedad de que, en los casos de empresas o explotaciones en que concurren capitales y actividades de uno y otro, los réditos se atribuirán a cada cónyuge en la forma que señalan las disposiciones que rigen el impuesto a los réditos.

2) Substitúyese el inciso 3º del artículo 17, por el siguiente:

3º) Los síndicos y liquidadores de las quiebras, síndicos de los concursos civiles, representantes de las sociedades en liquidación, los administradores legales o judiciales de las sucesiones y, a falta de éstos, el cónyuge supérstite y los herederos.

3) Substitúyese el inciso 4º del artículo 19, por el siguiente:

4º) Los sucesores a título particular en el activo y pasivo de empresas o explotaciones que las leyes impositivas consideran como una unidad económica susceptible de generar íntegramente el hecho imponible con relación a sus propietarios o titulares, si los contribuyentes no cumplieran la intimación administrativa de pago del impuesto adeudado. La responsabilidad del adquirente en cuanto a la deuda fiscal no determinada caducará:

1º) A los tres meses de efectuada la transferencia, si con antelación de quince (15) días ésta hubiera sido denunciada a la dirección;

«2º) En cualquier momento en que la dirección reconozca como suficiente la solvencia del cedente con relación al impuesto que pudiera adeudarse, o en que acepte la garantía que éste ofrezca a ese efecto..»

- 4) Substitúyese el párrafo 3º del artículo 23, por los siguientes:

«La determinación administrativa del impuesto, cierta o presuntiva, no podrá ser modificada en aquellos aspectos que hayan sido objeto de pronunciamiento expreso del juez administrativo, por aplicación de nuevas interpretaciones de las normas impositivas o por el empleo de otros procedimientos técnicos en la liquidación del gravamen. Podrá en cambio ser modificada, aun en dichos aspectos, cuando surjan nuevos elementos de juicio o se compruebe la existencia de error, omisión o dolo en la exhibición o consideración de los que sirvieron de base a la determinación anterior (cifras de ingresos, egresos, valores de inversión, y otros).»

«Las liquidaciones y actuaciones practicadas por los inspectores y demás empleados que intervienen en la fiscalización de los impuestos, no constituyen determinación administrativa de aquéllos, la que sólo compete a los funcionarios que ejercen las atribuciones de jueces administrativos, artículos 9º, inciso c), y 11.»

- 5) Substitúyese el párrafo final del artículo 25 por el siguiente:

«Se considerarán asimismo como réditos del ejercicio fiscal en que se produzcan los aumentos de capital cuyo origen no pruebe el interesado, salvo que la tasa que correspondiera por impuesto a los réditos, incluyendo esos aumentos, fuera inferior al 20 %, en cuyo caso se considerarán como beneficios sujetos al impuesto a las ganancias eventuales.»

- 6) Modifícase la escala de recargos del artículo 42, por la siguiente:

«Hasta un mes de retarlo... 5 % del impuesto adeudado.

«Más de un mes y hasta dos meses de retardo... 10 % del impuesto adeudado.

«Más de dos meses y hasta tres meses de retardo... 15 % del impuesto adeudado.

«Más de tres meses de retardo... 20 % del impuesto adeudado.»

- 7) Suprímese el inciso g) del artículo 46 y se lo reemplaza por el siguiente párrafo:

«Se reprimirá como defraudación fiscal el declarar, admitir o hacer valer ante la dirección general formas y estructuras jurídicas manifestamente inapropiadas para configurar la efectiva situación, relación u operación económica gravada por las leyes impositivas, cuando deba razonablemente juzgarse que ha existido intención de evitar la imposición justa..»

- 8) Substitúyese el artículo 74 por el siguiente:

«Los contribuyentes o responsables podrán repetir los impuestos interponiendo recurso ante la dirección, el que será requisito necesario para ocurrir a la justicia. Transcurridos seis meses después de iniciada la reclamación sin que se haya dictado resolución administrativa, el interesado podrá optar entre esperar la resolución que deje expedita la vía judicial u ocurrir directamente ante la justicia.

«La reclamación del contribuyente por repetición de impuestos facultará a la dirección para verificar la materia imponible por el período fiscal a que aquélla se refiere, aunque estuvieran prescritas las acciones y poderes fiscales, y, dado el caso, para determinar y exigir el impuesto que resultare adeudarse..»

- 9) Agréganse a continuación del artículo 111, las siguientes disposiciones transitorias:

«Artículo 112. — Con relación a los impuestos vencidos y no satisfechos con anterioridad a la promulgación del decreto ley 13.341/46, se aplicarán los recargos que establece el artículo 42 del mismo, en substitución de los intereses punitivos que establecía la ley 11.683 (texto ordenado), a menos que ya se hubiera requerido el pago de estos últimos con respecto a esos impuestos.

«Art. 113. — Las nuevas disposiciones sobre prescripción no se aplicarán a las prescripciones que, de acuerdo con las normas anteriores, se hayan operado antes de la promulgación del decreto ley 14.341/46.

«En cuanto a las prescripciones en curso al promulgarse el decreto ley mencionado, su punto de partida se trasladará en todos los casos al 1º de enero siguiente al hecho u omisión que dió nacimiento a la acción o facultad respectiva.

«Art. 114. — Las normas del decreto ley 14.341/46, que contienen disposiciones propias sobre causas de suspensión o interrupción de las prescripciones, sólo regirán para los hechos y actos posteriores a la promulgación de aquél.

«Art. 115. — Las nuevas disposiciones del decreto ley 13.341/46 sobre procedimientos administrativos o judiciales, serán también aplicables a las actuaciones en trámite al promulgarse el decreto ley, pero desde el estado en que se encuentren..»

- 10) Substitúyese el artículo 3º del decreto ley 14.341/46 (subsiguiente al 111 del texto nuevo de la ley 11.683), por el siguiente:

«Quedan exentos de recargos y multas los infractores a la ley 11.683 (texto ordenado), a las leyes que se rigen por ella (de impuestos a los réditos, a las ventas, a los beneficios extraordinarios, para aprendizaje, a las apuestas de los hipódromos de carreras y ganancias eventuales) y a las disposiciones que las modifican, si tales infractores presentan espontáneamente las declaraciones juradas y pagan el impuesto correspondiente antes del 31 de

diciembre de 1946, en las condiciones previstas en el artículo 50 de la Reglamentación General del Impuesto a los Réditos del 2 de enero de 1939..

Art. 3º — Modifícanse, en la forma que a continuación se indica, los artículos del decreto ley 13.342/46, que seguidamente se mencionan:

- 1) Substitúyese el inciso d) del artículo 4º, por el siguiente:

„d) Los beneficios provenientes de derechos amparados por la ley de propiedad intelectual, siempre que el impuesto recaiga directamente sobre los autores y las respectivas obras estén debidamente inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual..

- 2) Substitúyese el tercer párrafo del artículo 5º, por el siguiente:

„Para los bienes (muebles, inmuebles, derechos o de cualquier otra especie) adquiridos por herencia, legado o donación, se aplicarán las disposiciones anteriores, con prescindencia del valor fijado a los efectos del pago del impuesto a la transmisión gratuita de bienes. El impuesto aludido será considerado como un gasto deducible a los efectos de determinar el beneficio imponible..

- 3) Agrégase el artículo 6º el siguiente párrafo:

„Cuando se obtengan beneficios provenientes de premios de lotería y juegos de azar, se presume de derecho, que los gastos incurridos para su obtención equivalen al 10 % de la ganancia obtenida. En ningún caso, este 10 % podrá compensarse con beneficios de otra naturaleza alcanzados por el presente impuesto..

- 4) Substitúyese el artículo 7º por el siguiente:

„Cuando las operaciones, actos o actividades comprendidos en este decreto ley —salvo las indicadas en el último párrafo del artículo anterior— arrojaran pérdidas, las mismas podrán compensarse con otros beneficios producidos en el año y alcanzados por el presente decreto ley, a los fines de establecer la utilidad neta imponible. Si dichas pérdidas no pudieran cubrirse con otros beneficios, el remanente o quebranto no compensado podrá deducirse de los beneficios netos sujetos al presente gravamen, correspondiente a los cuatro años siguientes. Bajo ningún concepto se admitirá la compensación con utilidades o ingresos alcanzados por la ley del impuesto a los réditos..

- 5) Substitúyese el artículo 9º por el siguiente:

„No pagarán este impuesto los primeros \$ 6.000 m/n. anuales de beneficios alcanzados por la presente ley.

„Si el beneficio es obtenido por varias personas, cada una de ellas sólo tendrá derecho

a deducir en su declaración jurada una parte proporcional de los \$ 6.000 m/n., conforme con la participación que le ha correspondido en la utilidad impositiva generada por la operación.

„En ningún caso, la deducción podrá exceder de \$ 6.000 m/n. anuales por contribuyente..

- Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ramón Antonio Cereijo.

ANTECEDENTES

I

Buenos Aires, 8 de agosto de 1946.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a consideración de vuestra honorabilidad el adjunto proyecto de ley, que introduce algunas modificaciones a los siguientes decretos leyes:

14.338/46 Ley 11.682 (texto nuevo). Impuesto a los réditos.

14.341/46 Ley 11.683 (texto nuevo). Procedimiento para la percepción y fiscalización de impuestos.

14.342/46 Impuesto a las ganancias eventuales.

I. — *Decreto ley 14.338/46. Ley 11.682, texto nuevo. Impuesto a los réditos*

Varias son las modificaciones que se proyecta introducir en el régimen del impuesto a los réditos, las que para mayor claridad se dividirán en tres grupos, a saber:

1º) Aumento de deducciones por mínimos no imponibles;

2º) Aumento de deducciones por cargas de familia e inclusión, como tales, de personas que no figuran en el régimen de la ley 11.682 (texto nuevo);

3º) Modificación y aclaración de ciertas disposiciones, a fin de contemplar el verdadero espíritu que informa al nuevo régimen impositivo.

1º *Aumento de deducciones por mínimos no imponibles.*

Concordante con la política reiteradamente expuesta por el Poder Ejecutivo, en el sentido de favorecer a las clases económicamente menos dotadas, se proyecta la elevación de mínimos no imponibles, como un medio tendiente —entre otras cosas— a obtener aquella finalidad y una mejor percepción y fiscalización del impuesto.

A tales efectos, se proyecta clasificar a los contribuyentes en dos grandes grupos, a saber: con cargas de familia y sin cargas de familia.

Para los primeros, los que tienen cargas de familia, se les eleva el mínimo no imponible en \$ 100 m/n. mensuales, es decir \$ 1.200 m/n. anuales, en comparación con el que fija la ley 11.682 (texto nuevo). Para los segundos, los que no tienen cargas de familia, se dejan subsistentes los mínimos que establece la ley 11.682 (texto nuevo), pero a muchos de los cuales al-

canzará el beneficio de la modificación que se comenta en el párrafo siguiente.

Con el ánimo de favorecer a contribuyentes que tienen réditos de cuarta categoría (trabajo personal) a la vez que simplificar el cálculo del gravamen, se proyecta eliminar los adicionales del 20 % y 10 % que establece el artículo 20 de la ley 11.682 (texto nuevo), reemplazando los mismos por una suma equivalente al importe en que el rédito del trabajo personal exceda de \$ 6.000 m/n. o \$ 4.800 m/n. anuales —según que tengan o no personas a su cargo— pero fijando como deducción adicional máxima por tal concepto, la suma de \$ 1.800 moneda nacional anuales.

Estas modificaciones implican elevar los mínimos no imponibles para las personas de existencia visible residentes en el país, que tienen cargas de familia, en la siguiente forma:

Categoría de réditos	Régimen de la ley 11.682 (texto nuevo)	Régimen proyectado
1ª	2.400	3.600
2ª	2.400	3.600
3ª	4.800	6.000
4ª	6.600	7.800

Las modificaciones enumeradas han de significar una importante merma en la recaudación del impuesto a los réditos. En efecto, los cálculos efectuados hacen presumir que los ingresos del fisco se verán disminuidos en una cifra que oscilará alrededor de los \$ 15.000.000 moneda nacional anuales.

No obstante el significativo sacrificio que esa merma en la recaudación implica para las arcas fiscales, el Poder Ejecutivo, guiado por los propósitos ya enunciados, no vacila en someter a consideración de vuestra honorabilidad la modificación expuesta.

La elevación de los mínimos no imputables en la forma brevemente descrita, beneficiará a todas las personas de existencia visible y sucesiones indivisas —contribuyentes del impuesto— que tengan personas a su cargo, cuyo número puede calcularse, aproximadamente, en 80.000 contribuyentes directos y varios millares que sufragán el impuesto mediante la retención en la fuente.

Cabe destacar que el espíritu del proyecto que se comenta ha sido favorecer con una mayor deducción a las personas casadas, y viudas o divorciadas, con hijos, es decir, a igualdad de rentas, gravar con mayor impuesto a las solteras, viudas o divorciadas sin hijos. Pero como entre estas últimas existe cierto número que tiene otras personas a su cargo y no hijos (padres, hermanos, etcétera), se consideró equitativo dispensarles —a estos efectos— el mismo tratamiento que a las personas casadas, y viudas o divorciadas, con hijos.

2º Aumento de deducciones por cargas de familia e inclusión como tales de personas que no figuran en el régimen de la ley 11.682 (texto nuevo).

El Poder Ejecutivo, inspirado en la noble finalidad de favorecer a aquellos contribuyentes que tienen sobre sí la sagrada responsabilidad de mantener una familia y teniendo en cuenta la elevación en el costo de la vida, proyecta elevar —además del aumento del mínimo no imponible comentado en el punto 1º— en un 50 % el monto de las deducciones por descen-

dientes en línea recta, ascendientes, hermanos, suegros, yerno y nuera a que se refiere el artículo 21 de la ley 11.682 (texto nuevo).

Estos aumentos en las deducciones beneficiarán, aproximadamente, a 85.000 contribuyentes directos y a varios millares que sufragán el impuesto mediante la retención en la fuente.

Si bien las modificaciones proyectadas representarán para las arcas fiscales una importante merma en sus ingresos, cuyo monto se calcula que ascenderá aproximadamente a \$ 7.000.000 m/n. anuales, el Poder Ejecutivo, por los fundamentos antes expuestos, cree necesario y conveniente llevar a la práctica las modificaciones expuestas.

Finalmente, cabe hacer notar que en el proyecto adjunto se admiten como cargas de familia deducciones que por omisión no se incluyeron en la ley 11.682 (texto nuevo), tales como hijas casadas, hijastros, etcétera, siempre que reúnan —claro está— las condiciones que fija el artículo 21 de dicha ley.

A simple título ilustrativo, es dable observar que —con las modificaciones proyectadas— si consideramos como familia tipo, a un empleado casado con dos hijos, sólo deberá abonar impuesto cuando supere un sueldo efectivo de \$ 900 m/n. mensuales.

Resulta interesante hacer notar que el aumento de mínimos no imponibles y cargas de familia traerá como consecuencia la eliminación de una apreciable cantidad de contribuyentes directos, cuyo número puede estimarse en unos 18.000, aproximadamente. Además, tales modificaciones disminuirán las tareas que actualmente deben cumplir los agentes de retención —muchos de los cuales se verán totalmente liberados de ellas— como consecuencia de que un gran número de empleados, obreros, etcétera, dejarán de ser contribuyentes.

Lo expuesto en el párrafo precedente, permitirá a su vez, a la repartición del ramo, un más amplio y efectivo contralor sobre el resto de los contribuyentes.

3º Modificación y aclaración de ciertas disposiciones a fin de contemplar el verdadero espíritu que informa el nuevo régimen impositivo.

En este orden de ideas, varias son las modificaciones y aclaraciones que se proyecta introducir al régimen de la ley 11.682 (texto nuevo).

El grupo más importante de ellas —que comprende las que afectan a los artículos 56, 57, 58, 61, 62 y 86— tiende a precisar conceptos que han dado lugar a interpretaciones que no conciden con el verdadero espíritu que inspiró el nuevo régimen de imposición a las sociedades de capital y a los dividendos y utilidades que las mismas reparten.

Le sigue en importancia el inciso que se proyecta agregar al artículo 65 —con la correlativa supresión del inciso h) del artículo 69— agregado necesario para evitar una evasión que hubiera significado en muchos casos cobrar sólo el 15 % de impuesto, cuando en atención a la naturaleza de los réditos y beneficiarios de los mismos, correspondería el 20 por ciento.

Merece ser destacada la modificación que se introduce con respecto a las compañías no constituidas en el país, que se ocupan en el negocio de transportes entre la República y países extranjeros, por la cual se proyecta dar al coeficiente del 10 % que fija el artículo 10, el carácter de presunción de derecho, concordando así con el tratamiento que el nuevo régimen impositivo sigue en los casos en que es prácticamente

imposible determinar en forma exacta el rédito de fuente argentina y siguiendo el ejemplo de otras legislaciones.

Análoga finalidad persigue el agregado que se proyecta, para el artículo 12 de la ley 11.682 (texto nuevo).

Las restantes disposiciones, que no merecen un comentario especial, responden a las finalidades generales antes enunciadas.

II.—Decreto ley 14.341/46. Ley 11.683 (texto nuevo).

Procedimientos para la percepción y fiscalización de impuestos.

Una de las modificaciones más importantes que se propicia en el proyecto adjunto, consiste en introducir, en materia de recargo por mora en el pago de los impuestos, anticipos e ingresos a cuenta, un régimen más benévolo que el establecido en el artículo 42.

En efecto, de acuerdo con la disposición legal citada, se fija una escala de recargos del 10 %, 15 % y 20 % sobre el impuesto adeudado, cuando el atraso es hasta un mes, hasta dos meses o más de dos meses, respectivamente.

Esta escala, al comenzar con un recargo del 10 % para los pagos no efectuados en la época que corresponde, crea una situación irritante para aquel contribuyente que se atrasa uno o pocos días en los ingresos, por lo cual ha parecido conveniente y necesario rebajar la penalidad del 10 % al 5 %. Asimismo, el hecho de dividir la tabla de recargo en cuatro escalas en lugar de tres y aumentar correlativamente el número de meses a que los mismos se refieren, atenúan en general la penalidad, como puede observarse en el cuadro siguiente:

Hasta un mes	10	5	50
Más de un mes y hasta dos meses	15	10	33,33
Más de dos meses y hasta tres meses	20	15	25
Más de tres meses	20	20	—

Las restantes modificaciones que se proyecta introducir responden en líneas generales a las siguientes finalidades:

- 1º) Atenuar la responsabilidad que fija la ley 11.683 (texto nuevo) para los sucesores a título particular, etcétera, procurando, entre otras cosas, no trabar el desarrollo del comercio, industria y otras actividades;
- 2º) Aclarar ciertas disposiciones a fin de que las mismas concuerden con el régimen del impuesto a los réditos y con el del impuesto a las ganancias eventuales;
- 3º) Ampliar a seis meses —en lugar de los cuatro que fija la ley que se proyecta modificar— el plazo, transcurrido el cual sin que se haya resuelto administrativamente el recurso de repetición, el contribuyente puede ocurrir, si lo desea, directamente ante la justicia;
- 4º) Poner al contribuyente a cubierto de nuevas determinaciones administrativas de impuesto, en aquellos aspectos que hayan sido objeto de pronunciamiento expreso del juez administrativo, por aplicación de nuevas interpretaciones de las normas impositivas o por el empleo de otros procedimientos técnicos en la liquidación del gravamen; pero aclarando que la determinación administrativa podrá ser modificada,

aun en dichos aspectos, cuando surjan nuevos elementos de juicio o se compruebe la existencia de error, omisión o dolo en la exhibición o consideración de los que sirvieron de base a la determinación anterior. Asimismo, se aclara que la determinación administrativa de los impuestos sólo compete a los funcionarios que ejercen las atribuciones de jueces administrativos;

- 5º) Crear un título de disposiciones transitorias destinado a contemplar la transición del régimen de la ley 11.683 (texto ordenado) al de la ley 11.683 (texto nuevo);

- 6º) Aclarar expresamente que la exención de recargos y multas que fija el artículo 3º del decreto ley 14.341/46, sólo se refiere a los siguientes impuestos:

- a) Impuesto a los réditos;
- b) Impuesto a las ventas;
- c) Impuesto a los beneficios extraordinarios;
- d) Impuesto para aprendizaje;
- e) Impuesto a las apuestas de los hipódromos de carreras;
- f) Impuesto a las ganancias eventuales.

III.—Decreto ley 14.342/46. Impuesto a las ganancias eventuales

Las principales modificaciones que se proyecta introducir en este impuesto obedecen a los siguientes fines:

- 1º) Crear un mínimo no imponible general e igual para todos los contribuyentes, de forma tal de eliminar la situación de injusticia que consagra el decreto ley 14.342/46, según el cual si el contribuyente obtiene un beneficio de \$ 4.001 m/n. paga el 20 % sobre el total (\$ 800,20 m/n.), en tanto que si el beneficio es sólo de \$ 4.000 m/n., no sufraga impuesto alguno.

La disposición que se proyecta modificar, aparte de la injusticia que representa, sería un factor que alentaría, en muchos casos, la evasión de impuesto, simulando beneficios menores que los que realmente corresponden.

Asimismo y con el fin de dejar fuera del ámbito de la imposición beneficios pequeños, se proyecta que el mínimo no imponible sea de \$ 6.000 m/n. anuales, en lugar de los \$ 4.000 m/n. que fija el decreto ley 14.342/46 y que, como se ha expresado, no reviste el carácter de mínimo no imponible.

Finalmente, es de destacar que todo lo relativo a la materia referida, se ha completado con disposiciones que tienden a evitar que, mediante maniobras, se pretenda eludir la justa imposición;

- 2º) Resolver de pleno derecho un problema que no admite otra solución, cual es determinar el monto de los gastos incurridos cuando se obtienen beneficios provenientes de premios de lotería y juegos de azar;
- 3º) Modificar el régimen para fijar el costo de los bienes adquiridos por herencia, legado o do-

nación y el tratamiento a dispensar al impuesto pagado por la transmisión gratuita de bienes.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN PERÓN.
Ramón Antonio Cereijo.

II

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1946.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Con fecha 8 de agosto próximo pasado, el Poder Ejecutivo sometió a consideración de vuestra honorabilidad un proyecto de ley modificando, entre otros, el decreto ley 14.341/46 (ley 11.683, texto nuevo), sobre procedimiento para la percepción y fiscalización de impuestos.

En dicho proyecto se contempla la incorporación al referido decreto ley, a continuación del artículo 111 de este último, de varias disposiciones transitorias destinadas a contemplar la transición del régimen de la ley 11.683 (texto ordenado), al del decreto ley 14.341/46 (ley 11.683, texto nuevo).

Entre ellas, el artículo 113 establece que las nuevas disposiciones sobre prescripción no se ajustarán a las prescripciones que, de acuerdo con las normas anteriores, se hayan operado antes de la promulgación del citado decreto ley, y que, en cuanto a las prescripciones en curso al promulgarse el mismo, su punto de partida se trasladará, en todos los casos, al 1º de enero siguiente al hecho u omisión que dió nacimiento a la acción o facultad respectiva.

Ahora bien, previendo las variadas interpretaciones que podrían derivarse del texto proyectado, y a fin de salvar las dificultades que podrían presentarse con respecto a las prescripciones en curso, entiende el Poder Ejecutivo que sería conveniente aclarar aun más el concepto que ha dado origen a la norma propiciada. A tal fin podría establecerse, a continuación del artículo 113 proyectado, el tratamiento a aplicar en aquellos casos en que las nuevas disposiciones sobre prescripción del decreto ley 14.341/46 (ley 11.683, texto nuevo) mantienen, alargan o abrevian los plazos con respecto al régimen anterior, contemplando en forma adecuada para el contribuyente y para el fisco, las distintas situaciones que pueden presentarse.

En consecuencia, el artículo 113 proyectado en aquella oportunidad, con el agregado que ahora se propicia, quedaría redactado en los siguientes términos:

«Artículo 113. — Las nuevas disposiciones sobre prescripción no se aplicarán a las prescripciones que, de acuerdo con las normas anteriores, se hayan operado antes de la promulgación del decreto ley 14.341/46 (ley 11.683, texto nuevo).

«En cuanto a las prescripciones en curso al promulgarse el decreto ley mencionado, su punto de partida se trasladará en todos los casos al 1º de enero siguiente al hecho u omisión que dió nacimiento a la acción o facultad respectiva, aplicándose a los términos de prescripción las normas siguientes:

- a) Si se mantienen o alargan los plazos, se aplicarán las nuevas disposiciones;
- b) Si se abrevian los plazos, se aplicarán las disposiciones anteriores, pero sin que el término

a correr pueda sobrepasar, desde el 1º de enero de 1947, los plazos de prescripción que el citado decreto ley establece.

Esta disposición está destinada a substituir a la contenida en el artículo 2º, punto 9) del proyecto de ley elevado a consideración de ese Honorable Congreso, con el mensaje de fecha 8 de agosto del corriente año. Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN PERÓN.
Ramón Antonio Cereijo.

Sr. Presidente (Guardo). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por San Luis, miembro informante de la comisión.

Sr. Fernández (H. S.). — Señor presidente: las reformas a las leyes de impuestos a los réditos y a las ganancias eventuales como así también a la ley de procedimientos para la fiscalización y percepción de impuestos, que se hallan a consideración de la Honorable Cámara, tienen un profundo contenido de justicia social.

El impuesto a los réditos es, sin duda, el impuesto más justo y su implantación en nuestro medio representó, en su momento, un paso decidido e importante hacia el perfeccionamiento del régimen tributario. El sistema fiscal argentino se caracterizaba, en tiempos pasados, por hacer incidir la mayor parte de la carga impositiva en los consumos, mediante gravámenes como los impuestos aduaneros y los impuestos internos que, como es sabido, gravitan sobre la población en general sin hacer distinciones en las posibilidades económicas ni en la capacidad tributaria de los contribuyentes.

La creación del impuesto a los réditos fué el punto de partida para la modificación de ese régimen inadecuado que no estaba de acuerdo con el grado de desarrollo alcanzado por la economía nacional ni concordaba con los elementales principios de justicia a que me he referido. Las leyes básicas de este gravamen fueron modificadas paulatinamente siguiendo la evolución de la economía y la experiencia recogida en su aplicación. Pudieron corregirse así muchos defectos y subsanarse en parte las evasiones. Pero aun se mantenían dentro del régimen de este impuesto situaciones inconvenientes e inequitativas en la incidencia tributaria, a las que ya me he referido en otra oportunidad, al tratar otras leyes impositivas.

Al gobierno de la revolución del 4 de junio le correspondió el privilegio de haber impreso a la política fiscal de la Nación, especialmente en lo referente a este gravamen, una orientación definida hacia un claro objetivo de justicia.

El propósito de que las cargas públicas incidan principalmente sobre aquellos que están en mejores condiciones para soportarlos desahortando de obligaciones, en lo posible al sector

de población con menores recursos, fué concretado especialmente en los decretos leyes 18.229, de 1943 y 14.338 de 1946. Por el decreto 14.342 de 1946, que creó el impuesto a las ganancias eventuales, esto es, a los beneficios no alcanzados por el impuesto a los réditos, se llevó a la práctica la finalidad de hacer incidir la carga tributaria sobre actividades que pueden afrontarla sin ocasionar perturbaciones en la economía general, concepto éste que se complementa y armoniza con el de una mayor justicia distributiva que ya se ha desarrollado, y cuyo conjunto representa todo un programa en materia de política impositiva, encarado y llevado a la práctica por el gobierno de la revolución.

Esas modificaciones, sin duda substanciales y trascendentes, no podrían ser y no son, definitivas. Como todo proceso renovador que busca afianzarse sin producir alteraciones profundas en la economía, la reforma impositiva señaló una orientación y avanzó en el camino fijado con la necesaria prudencia. El Poder Ejecutivo actual, al someter a consideración de este Honorable Congreso, las reformas a que luego me he de referir, supera aquella orientación e introduce una serie de disposiciones que contribuyen a perfeccionar, por vía del impuesto, los principios de justicia social en que se encuentra inspirado.

La finalidad y alcances de toda modificación al impuesto a los réditos puede medirse, principalmente, por sus efectos en el orden económico y social y, consecuentemente, con su menor o mayor gravitación en los ingresos fiscales, ya que este gravamen, por su naturaleza sigue de cerca las fluctuaciones de la economía y representa, dentro del conjunto de las rentas de la Nación, las cifras de mayor significación.

Hasta ahora, las reformas de las leyes básicas del impuesto a los réditos tuvieron la finalidad necesaria, que a veces fué fundamental, de acrecentar los recursos fiscales. En ese sentido, es significativo el hecho de que las modificaciones propiciadas por el Poder Ejecutivo, a que me estoy refiriendo, lejos de incrementar la renta pública, significarán una disminución apreciable en los ingresos de la Nación. No puede negarse, ni siquiera ponerse en tela de juicio, la finalidad superior que inspira a la reforma. Por encima de todas las razones de orden financiero, sobre todo en estos momentos en que un mayor ingreso fiscal pareciera indispensable para el buen éxito de la obra a realizar, el gobierno se preocupa por alivianar el esfuerzo constructivo de la población, en lugar de imponerle nuevas cargas.

Entrando ahora al análisis particular de la iniciativa, para facilitar la exposición, trataré separadamente las modificaciones que se proyectan a los decretos leyes 14.338/46, 14.341/46 y 14.342/46.

Decreto 14.338/46. Las numerosas modificaciones que se proyectan a este decreto ley, dan una idea de la magnitud de la iniciativa, ya que tales reformas comprenden aspectos variados del trabajo. Interpretando el sentir de esta Cámara, auténtica representación del pueblo argentino, creo un deber referirme en primer término, a las modificaciones destinadas a beneficiar a los contribuyentes del país y que en atención a la naturaleza de sus rentas, trabajo personal, y al hecho de tener personas a su cargo, se hacen preferentemente acreedoras a ello.

La modificación a los artículos 20 y 21 del decreto 14.338/46, relacionados con la renta mínima no imponible y cargas de familia constituye el objetivo principal del proyecto y es, sin duda, la reforma más trascendente que se ha introducido hasta ahora en este aspecto del impuesto a los réditos, destinado a desgravar aquella parte de las entradas que normalmente necesitan los contribuyentes para su sustento y el de las personas que están a su cargo.

Muchas fueron las críticas que se hicieron con respecto a la insuficiencia de los mínimos no imponibles. El Poder Ejecutivo ha recogido esas críticas y en una justa y equitativa medida los ha modificado, contemplando la realidad del problema e inspirado en los siguientes fines: a) Favorecer a aquellos contribuyentes que tienen personas a su cargo; b) Favorecer a los contribuyentes que obtienen réditos del trabajo personal; c) Simplificar la liquidación del gravamen.

A los efectos de llevar a la práctica la primera finalidad el proyecto que se encuentra a consideración eleva al mínimo no imponible en 100 pesos mensuales o sea 1.200 pesos anuales para todas aquellas personas que tengan cargas de familia. El fin social de la reforma salta a la vista, de manera que el comentario parece redundante; pero no está de más dejar establecido, en términos incontrovertibles, que la modificación responde a la política reiteradamente expuesta por el Poder Ejecutivo, política que, lejos de desvirtuarse o diluirse en la función de gobierno, tal como ha sucedido en los gobiernos anteriores, aparece confirmada y aun superada por los hechos.

La reforma tiende a dispensar un tratamiento preferente a las personas que viven de su trabajo personal, de acuerdo con los principios sociales del gobierno, que coloca al trabajo como fuente primordial de la creación de la riqueza. A tal fin, y además con el propósito de facilitar la liquidación del gravamen, se reemplazan los adicionales que establece el régimen actual de 20 % y 10 %, según el artículo 20 del decreto 14.338, por una suma equivalente al impuesto en el rédito de trabajo personal que excede en \$ 6.000 para los que tienen personas a su cargo y \$ 4.800 para los que no tienen cargas de familia, estableciendo expresamente que el au-

mento adicional en ningún caso podrá exceder de \$ 1.800 anuales.

Así, por ejemplo, un empleado casado, que gana \$ 9.000 anuales es decir, \$ 8.280 una vez deducido el aporte jubilatorio, tendrá un mínimo no imponible de \$ 7.800 m/n., formado por los siguientes conceptos: mínimo no imponible (artículo 20, inciso 1º del decreto ley 14.338/46, artículo 1º, punto 5 del proyecto de ley que está en consideración), \$ 4.800; adicional por tener carga de familia (artículo 1º, punto 5º del proyecto de ley en consideración), \$ 1.200; adicional por tratarse de réditos derivados del trabajo personal (artículo 1º, punto 5º del proyecto), \$ 1.800.

El móvil de esta modificación radica en la necesidad de compensar la elevación del costo de la vida que se ha venido operando de un tiempo a esta parte y es una de las tantas medidas propiciadas por el gobierno nacional, para conjurar los inconvenientes derivados de la situación anormal por que atravesó y atraviesa aún el mundo, como consecuencia de los hechos que son del dominio público.

Corresponde, además, destacar que el régimen actual en materia de deducciones por cargas de familia presenta ciertas incongruencias, tales como la de permitir la deducción de la nuera y no la de la hija casada, cosa absurda a todas luces, por lo cual el proyecto del Poder Ejecutivo subsana esta deficiencia y otras, tales como la no inclusión de los hijastros entre las deducciones autorizadas por el régimen actual.

Las modificaciones introducidas en materia de mínimo no imponible, beneficiarán a 90.000 contribuyentes directos y a muchos miles que abonarán el impuesto por medio de sus agentes de retención. Para el fisco la medida significará un menor ingreso de \$ 15.000.000 por año, pero esta importante merma, en relación con los beneficios que representará para un numeroso sector de la población, carece en realidad de significación.

Aun hay más. El alto espíritu de justicia que inspira al Poder Ejecutivo, ha hecho que éste proponga la elevación del 50 % de los importes deducibles en concepto de cargas de familia, representados por descendientes en línea recta y ascendientes: hermano, suegro, yerno y nuera. La elevación de los importes deducibles en concepto de cargas de familia representará un beneficio para 85.000 contribuyentes directos, es decir, para aquellos que pagan el impuesto mediante presentación de declaración jurada anual y para varios miles que tributan el gravamen por el sistema de retención en la fuente. Al igual que la elevación de los mínimos no imponibles, esta medida repercutirá en las finanzas nacionales e importará una merma considerable en los ingresos del

Estado, merma que se calcula aproximadamente en siete millones de pesos moneda nacional.

Como se ve, el total que perderá el fisco como consecuencia de estas modificaciones es de unos 22.000.000 de pesos, pero indudablemente, una gran masa de nuestra población se verá directamente beneficiada.

Si a los beneficios que las modificaciones significarán para la gran masa de los contribuyentes se agrega que la Dirección del Impuesto a los Réditos podrá prestar una mayor atención a la fiscalización de los restantes sujetos a imposición, ya que se introducirá una disminución aproximada de 18.000 en el número de éstos, sin contar que se reducirá en gran escala la tarea de los agentes de retención, haciendo que oblen el gravamen en forma más correcta, es decir, percibiendo en cada caso lo que legalmente deben ingresar, se ve entonces la conveniencia de que esta Cámara apoye con su voto esta medida tan plausible propiciada por el Poder Ejecutivo.

El proyecto en consideración contiene otras numerosas disposiciones destinadas a precisar normas del decreto 14.338/46. Tal es el caso de las disposiciones contenidas en el artículo 1º, inciso 4º del proyecto en consideración, cuya ausencia antes en el texto del decreto ley 14.338/46 pudo dar origen a que se pensara que valores inmobiliarios exentos por leyes especiales estaban alcanzados por el impuesto, cuando la finalidad en ningún momento ha sido tal. En este sentido conviene también señalar el punto 7º del artículo 1º que establece: «A tal efecto los réditos del menor se adicionarán a los réditos propios del usufructuario.» Esta situación surgía del artículo 30 del decreto ley, pero se ha creído conveniente aclarar. Sus fundamentos radican en el hecho de que si los réditos corresponden a los usufructuarios, resulta lógico y equitativo que el gravamen incida sobre dichas personas, que son las que disfrutan y gozan de la renta.

Como es sabido, el decreto ley 14.338 del año 1946, que ya ha merecido la aprobación de esta Honorable Cámara, ha instituido un nuevo régimen en materia de imposición a las sociedades de capital y otros aspectos a ellas vinculados (dividendos, utilidades que las mismas reparten, etcétera), régimen que tiende a evitar que los fines que se persiguen con el impuesto a la renta se vean subvertidos en la práctica por las numerosas maniobras que se inventan para eludir el pago del gravamen, sea constituyendo domicilio en el exterior, sea regulando la distribución de los beneficios de las sociedades de capital, o por numerosas otras maniobras puestas en juego por lo que podría llamarse la industria del fraude impositivo.

La experiencia recogida en la aplicación de una ley y las críticas a que se encuentra sometida hacen surgir la necesidad de introducirle agregados y modificaciones que tienden a aclarar las dudas que suscita y a precisar algunos conceptos que, sea por omisión o por defecto de redacción, pueden dar lugar a interpretaciones que se apartan del pensamiento del legislador. A este propósito, y a fin de evitar asimismo las maniobras a que antes me he referido, se orientan las modificaciones contenidas en el artículo 1º, puntos 9º, 10, 11, 13 y 17 del proyecto en cuestión.

Las disposiciones contenidas en los puntos 14 y 15 del proyecto a que me estoy refiriendo, evitarán una maniobra que se hubiera consumado de inmediato y que consistiría en que las sociedades de capital deducirían las remuneraciones o sueldos por miembros del directorio, etcétera, según conviniera o no a sus intereses. Esta situación está contemplada en el punto 14. Así, por ejemplo, una sociedad de capital con beneficio de 1.000.000 de pesos, que abona 100.000 pesos —no tomando para determinar la cifra la remuneración por asesoramiento recibido desde el exterior— podría no convenirle deducir el gasto, por lo cual sufragaría el impuesto de la siguiente manera: beneficio, 1.000.000 de pesos; gastos, 100.000 pesos; total, 1.100.000 pesos. El 15 % es 165.000 pesos. Mientras que si se deduce el gasto, el pago ascendería en esta forma: 15 % sobre 1.000.000 es 150.000 pesos; 20 % sobre 100.000 pesos es 20.000 pesos; total, 170.000 pesos. Como se ve hay una diferencia de 5.000 pesos a favor del ingreso o percepción del impuesto.

El decreto 14.341 de 1946, también es materia a tratarse. Establece un régimen de procedimientos para la percepción y fiscalización de los impuestos a cargo de la Dirección General del Impuesto a los Réditos que es objeto también de importantes reformas.

De conformidad con lo que establece el artículo 42 del decreto ley 14.341 de 1946, la falta de pago a su vencimiento de los impuestos, anticipos e ingresos a cuenta, hacen surgir sin necesidad de interpelación alguna la obligación de pagar juntamente con aquéllos un recargo del 10 %, del 15 % o del 20 %, según que el retardo sea hasta de un mes, dos o tres meses, respectivamente.

Los porcentajes indicados son evidentemente elevados para casos en que el retardo es, por ejemplo, de un día, o de pocos días. El solo atraso de un día implicaría para un contribuyente que debe abonar 10.000 pesos de impuesto, un recargo de mil pesos, o sea el 10 % sobre los 10.000 pesos.

Con el fin de que los recargos implantados no sean demasiados gravosos para los contribuyen-

tes, es que se ha substituído la escala contenida en el artículo 42 mencionado por la que figura en el artículo 2º del punto 6º del proyecto de ley que se encuentra a consideración de la Honorable Cámara. La simple comparación de ambas escalas permite apreciar que la modificación que se proyecta responde a un estudio más ajustado, aumentando la penalidad a medida que transcurre el tiempo, pero empezando por un límite más prudente, no tan gravoso como el contenido en el artículo 42 del decreto ley 14.341/46.

Referidos los recargos establecidos en el decreto 14.341/46 con los que se propician en este proyecto, se observa que aquéllos se disminuyen según la mora en el pago, hasta un 50 por ciento.

Las disposiciones contenidas en el artículo 2º, del punto 9º del proyecto con el agregado a que se refiere el Poder Ejecutivo de fecha 6 del corriente, contemplan y dan solución legal a los diversos problemas que se presentan como consecuencia del cambio de régimen en varios aspectos de esta materia, tales como: Recargos —en substitución de los intereses punitivos que establecía la ley 11.682 (texto ordenado)—, forma de computar las prescripciones en curso y causas de interrupción o suspensión de las mismas, etcétera. Las soluciones arbitradas en cada caso, justas y equitativas, son dignas de destacarse, ya que, como lo expresa el Poder Ejecutivo, resuelven adecuadamente para el contribuyente y para el fisco las distintas situaciones que pueden presentarse.

El punto 10 del artículo 2º del proyecto tiene por objeto aclarar expresamente que la exención de recargo para los infractores que regularicen espontáneamente su situación antes del 31 de diciembre de 1947 sólo se refieren a los impuestos a los réditos, a las ventas, a los beneficios extraordinarios, para aprendizaje, a las apuestas de carreras y a las ganancias eventuales.

Decreto ley 14.342 de 1946. La principal modificación de este decreto ley, es la efectuada al artículo 9º del mismo y consta de lo siguiente: a) Elevar la desgravación que el mismo preverá, de 4.000 pesos moneda nacional, a 6.000 pesos, con lo cual se evitará gravar beneficios pequeños, siguiendo así los principios de justicia tributaria de no alcanzar con el impuesto ganancias exiguas, en las que, en muchos casos, el impuesto que se percibe no compensa adecuadamente el costo de la recaudación. Esto permitirá, a su vez, al no tener que verificar esas pequeñas ganancias, dedicar preferente atención a la fiscalización de beneficios de mayor monto, es decir, operaciones más importantes.

b) Asimismo a la degradación de 6.000 pesos moneda nacional se le da el carácter del mínimo no imponible, situación que no se presentaba con

anterioridad, ya que, como se expresa en el mensaje del Poder Ejecutivo, si en una operación determinada se había obtenido un beneficio de 4.000 pesos, no correspondía pagar gravamen, en tanto que por el solo hecho de obtener 4.001 pesos debía abonar 800,20 pesos moneda nacional. Como se ve, la injusticia tributaria no podía ser mayor.

De ahí, entre otras, la ventaja de la modificación que se propicia. En el proyecto en consideración se resuelve de pleno derecho un problema que en la práctica hubiese sido de imposible solución, cual es el de determinar los gastos en que se ha incurrido para obtener ganancias provenientes de premios de lotería y juegos de azar. En ese sentido el proyecto establece que aquéllos serán del diez por ciento de las ganancias obtenidas y que en ningún caso este diez por ciento podrá compensarse con beneficios de otra naturaleza alcanzados por el presente impuesto.

El proyecto contiene en el punto 4º, disposiciones especiales que indican expresamente el tratamiento a seguir para compensar las pérdidas originadas en actividades alcanzadas por el trabajo, salvo las provenientes de loterías o juegos de azar.

Finalmente, debo destacar que el proyecto modifica el procedimiento a seguir para determinar el costo de los bienes recibidos por herencia, legado o donación, admitiendo deducir el impuesto pagado por la transmisión gratuita de bienes para determinar el beneficio imponible a los efectos del gravamen a las ganancias eventuales.

Las modificaciones y aclaraciones contenidas en el proyecto a consideración de la Honorable Cámara, aplicables a partir del 1º de enero de 1947, representan, sin duda alguna, una apreciable mejora en el régimen impositivo por las finalidades de bien social que las inspiran y la justicia tributaria en que se apoyan. Si a esto agregamos que las mismas tienden a cerrar en forma cada vez más pronunciada el círculo de la evasión fiscal —que cuanto mayor es, hace más antipático e injusto el gravamen—, no tengo la menor duda que la Honorable Cámara habrá de prestarle su aprobación.

El fisco dispondrá de cuerpos legales ordenados y completos —ordenación que deberá efectuar el poder administrador en virtud de lo establecido en el artículo 44 de la ley 12.345 y disposiciones concordantes de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto— que le permitirá cumplir en forma eficaz la aplicación, percepción y fiscalización de los impuestos a que ellas se refieren.

En consecuencia, en nombre de la mayoría de la Comisión de Presupuesto, en cuya representación he informado, solicito de la Honorable Cámara aprobación del despacho que tiene a su consideración.

Sr. Arias. — ¿Hay número en la casa, señor presidente?

Sr. Presidente (Guardo). — Sí, señor diputado.

Se va a pasar lista.

—Se pasa lista:

Diputados presentes: Alvarez (J. D.), Alvarez (N.), Alvarez Pereyra, Alvarez Vocos, Allub, Antille, Aráoz, Arévalo Cabeza, Arias, Bagnasco, Balbin, Barreiro, Baulina, Benítez, Bertini, Braga, Busaniche, Calcagno, Cámara, Candiotti, Casal, Casas Noblega, Colom, Cufre, Curchod, Decker, Degreef, de la Torre, del Carril, del Mazo, Dellepiane, Díaz, Díaz Colodrero, Díaz de Vivar, Dri, Fajre, Fernández (B. S.), Fernández (H. S.), Ferrando, Ferrer, Fregossi, Frondizi, Galvagni, Garaguso, Garay, García, García Quiroga, Gericke, González Funes, Graña Etcheverry, Lareo, López Serrut, Mac Kay, Maineri, Malecek, Mariategui, Martínez Guerrero, Martínez Luque, Messina, Montes de Oca, Mujica, Obeid, Orozco, Osinalde, Pastor, Perea, Petruzzi, Pontieri, Pueyrredón, Raña, Ravignani, Reyes, Rodríguez (N. M.), Rojas (A.), Rossi, Rubino, Rumbo, San Millán, Santander, Saravia, Sarmiento, Sarraute, Sustaita Secber, Tejada, Tesorieri, Toro, Valdez, Velloso Colombres, Visca y Zanoni.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar en general el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

—Resulta afirmativa de 81 votos; votan 84 señores diputados.

Sr. Presidente (Guardo). — En consideración, en particular, el artículo 1º.

—Se lee:

Artículo 1º — Modifícanse, en la forma que a continuación se indica, los artículos de la ley 11.682, texto nuevo (decreto ley 14.338/46), que en cada caso se mencionan:

- 1) Substitúyese el primer párrafo del artículo 10 por el siguiente:

«Se presume de derecho, que las compañías no constituidas en el país, que se ocupan en el negocio de transportes entre la República y países extranjeros, obtienen réditos netos de fuente argentina, iguales al 10 % del importe bruto de los fletes por pasajes y cargas correspondientes a esos transportes.»

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar el punto 1) del artículo 1º.

—Resulta afirmativa de 77 votos; votan 80 señores diputados.

Sr. Fernández (H. S.). — Como todos los señores diputados tienen el orden del día sobre sus bancas, solicito que la Secretaría se limite a enunciar los incisos y que los que no fueren observados se den por aprobados.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Guardo). — Como hay asentimiento, así se hará.

—Sin observación se dan por aprobados los puntos 2) y 3).

—En consideración el punto 4).

Sr. Ravignani. — Pido la palabra.

Voy a votar en contra de la hipótesis posible de desgravación de determinados réditos contenida en el punto 4), especialmente en lo que se refiere a sociedades mixtas.

Por ningún concepto debe eximirse de impuesto a los réditos a los accionistas particulares de sociedades mixtas. Sería crear una situación diferencial con respecto a otras actividades. Cuando se creó el impuesto a los réditos se establecieron diversas exenciones, pero la política general en esa materia fué incorporar gradualmente todo lo que fuera rédito.

Si se grava el trabajo personal, no puede admitirse la posibilidad de leyes que desgraven a los accionistas particulares de sociedades mixtas. Precisamente el tipo más noble de impuesto a los réditos es el que grava las rentas provenientes de acciones, en contraposición al rédito producido por el trabajo personal, que es el esfuerzo continuo y que a menudo resulta injusto gravar.

Además, las acciones de sociedades mixtas tienen asegurado un interés mínimo, lo cual hace resaltar más la injusticia de desgravar sus réditos. Hay algunas sociedades mixtas en que la participación particular va a ser cada vez mayor, como la Corporación de Transportes, cuyos réditos estarían injustamente exentos de impuesto.

Sr. Montes de Oca. — Señor presidente: hago indicación de que en el punto 4) se agregue un nuevo inciso que diga: «la dieta de los legisladores».

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Frondizi. — No voy a agregar nuevos argumentos a los que acaba de formular el señor diputado Ravignani con referencia a la exención que se pretende para las acciones de sociedades mixtas, pero como se trata de un asunto fundamental vamos a pedir que el inciso proyectado se vote por partes, a fin de votar en contra de esa exención.

El régimen de sociedades mixtas ha sido ya tratado varias veces en esta Cámara. Diputados

de la Unión Cívica Radical hemos denunciado que se está creando un tipo de capitalistas privilegiados que son admitidos en las sociedades mixtas. Como se ha indicado, los capitales de las sociedades mixtas tienen garantizados un interés mínimo y no es posible que todavía se les conceda la exención del impuesto a los réditos. No hay que olvidar que entre las sociedades mixtas está la Corporación de Transportes de Buenos Aires, problema que seguramente será debatido en esta Cámara a la brevedad. No es posible que a esos accionistas, que han conseguido el reconocimiento de capitales que no tienen, además de garantizarles el interés, todavía se les conceda esta exención.

Pedimos, en consecuencia, que el apartado k) sea votado por partes: primero hasta «entidades oficiales» y después una votación especial sobre la exención que se pretende conceder a las sociedades mixtas.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. del Carril. — Hay que agregar, señor presidente, que la situación está prevista también en el artículo 19 inciso a), de la ley de impuesto a los réditos, que dice que los réditos de los fiscos nacional, provinciales y municipales, y los de las instituciones pertenecientes a los mismos y las empresas formadas por capitales de particulares e inversiones de los fiscos nacional, provincial y municipal estarán exentos en la parte de réditos que corresponda a estos últimos. Es decir, que estaría ya prevista la situación de los fiscos nacional, provincial y municipal, y no la de los particulares, que contempla el artículo que en la actualidad se proyecta.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar por partes el inciso k), agregado al artículo 19, de acuerdo a la indicación del señor diputado Frondizi. Se va a votar la primera parte: «4) Agrégase al artículo 19 el siguiente inciso: k) Los réditos de títulos, acciones, cédulas, bonos y valores similares, emitidos por entidades oficiales.»

—Resulta afirmativa de 77 votos; votan 82 señores diputados.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar el resto del inciso k).

Sr. Balbin. — Pido que la votación sea nominal.

Sr. Presidente (Guardo). — La Presidencia desea saber si está suficientemente apoyado el pedido de votación nominal.

—Resulta suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Benítez. — Voy a hacer una indicación que creo solucionará este problema. Solicitaria que se agregara: «en la parte que corresponde al Estado nacional, provincial o municipal». Creo que el verdadero sentido de esta cláusula, en concordancia con el inciso a que ese ha referido el señor diputado del Carril, es que en las sociedades mixtas la exención se refiere a la parte que corresponde al Estado nacional, provincial o municipal.

Sr. Frondizi. — Naturalmente que si ése fuera el sentido de la cláusula, nosotros estamos conformes; pero deseo llamar la atención del señor diputado Benítez sobre el hecho de que la parte que corresponde a la Nación nunca podría pagar impuesto a los réditos, porque el Estado se lo pagaría a sí mismo. La cláusula tiende, evidentemente, a liberar de impuesto a los aportes de capitales hechos por los particulares; y con eso nosotros no estamos conformes.

Sr. Benítez. — Personalmente, tampoco estoy conforme con eso; y por tal razón solicito que se agregue al inciso: «en la parte correspondiente al Estado nacional, provincial o municipal».

Sr. Frondizi. — Desde luego, quedaría establecido que las acciones de las sociedades mixtas que suscriben los particulares pagan impuesto a los réditos.

Sr. Benítez. — Exactamente, señor diputado.

Sr. Degreef. — Sí, señor diputado.

Sr. Visca. — Es lo lógico.

Sr. Frondizi. — Aceptamos, entonces, el agregado.

Sr. Presidente (Guardo). — ¿Lo propone en nombre de la comisión el señor diputado?

Sr. Benítez. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a leer.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó) — «Inciso k): Los réditos de títulos, acciones, cédulas, bonos y valores similares emitidos por entidades oficiales o mixtas de la Nación, provincias o municipalidades, cuando exista una ley general o especial que así lo disponga, en la proporción que corresponda a la entidad oficial.»

Sr. Benítez. — «En la parte que corresponda.»

Sr. López Serrot. — Que se lea nuevamente.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a leer nuevamente.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó) — «Inciso k): Los réditos de títulos, acciones, cédulas, bonos y valores similares, emitidos por entidades oficiales o mixtas de la Nación, provincias o municipalidades, cuando exista una ley general o especial que así lo disponga en la parte que corresponda a la entidad oficial.»

Sr. López Serrot. — No puede quedar así, porque comprendería sólo lo que corresponde a la primera parte...

Sr. Benítez. — El agregado hay que ponerlo después de la palabra mixta: «en la parte que

corresponda a la Nación, provincias o municipalidades, cuando exista una ley general o especial que así lo disponga». De ese modo el agregado estaría vinculado directamente a la enumeración de sociedades mixtas.

Sr. Ravignani. — ¿No sería más práctico suprimir el inciso y dejar el artículo 19 tal cual figura en el texto ordenado de la ley 11.682?

Sr. Benítez. — No, señor diputado, porque el artículo 19 no contiene una expresión igual.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. del Carril. — Voy a dar lectura del artículo 19 de la ley 11.682, para que los señores diputados adviertan la diferencia.

Dice así: «No están sujetos a gravamen: a) Los réditos de los fiscos nacional, provinciales y municipales y los de las instituciones pertenecientes a los mismos. Las empresas formadas por capitales de particulares e inversiones de los fiscos nacional, provinciales y municipales, estarán exentas en la parte de rédito que corresponda a estos últimos.»

Es decir, que lo que se prevé ahora no es la situación de estos últimos, sino de los anteriores, que son los particulares.

Lo que habría que suprimir es el inciso directamente.

Sr. Rojas (A.). — Se podría buscar una fórmula más clara, como por ejemplo la siguiente: «... quedando excluido de los beneficios de esta exención el aporte de los capitales particulares.»

Sr. Presidente (Guardo). — Por Secretaría se dará lectura del inciso k), tal como quedaría redactado.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — «Inciso k): Los réditos de títulos, acciones, cédulas, bonos y valores similares emitidos por entidades oficiales...» «... o mixtas, en la parte que corresponda a la Nación, provincias o municipalidades, cuando exista una ley general o especial que así lo disponga.»

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar la parte final del inciso k), en la forma propuesta.

Sr. Ravignani. — Para que no quede duda, conviene aclarar que queda entendido que los accionistas de sociedades mixtas pagan impuesto a los réditos.

Sr. Benítez. — Sí, señor diputado.

—Se vota y resulta afirmativa de 78 votos; votan 80 señores diputados.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar si la Honorable Cámara se ocupa de la proposición hecha por el señor diputado por Santiago del Estero.

—Resulta afirmativa de 65 votos; votan 80 señores diputados.

Sr. Presidente (Guardo). — Sírvase el señor diputado enunciar su proposición.

Sr. Montes de Oca. — Propongo la siguiente redacción como inciso 1): «Las dietas de los legisladores nacionales.»

Sr. López Serrot. — Sería interesante conocer los fundamentos que asisten al señor diputado que propone este agregado, para recién entonces entrar a considerarlo. Hasta este momento solamente conocemos el texto del agregado, pero desconocemos en qué lo funda el señor diputado proponente.

Sr. Montes de Oca. — Considero que la dieta no es un sueldo, sino un gasto de representación, o sea un gasto derivado de la propia función del legislador.

Sr. López Serrot. — Sería entrar en una larga discusión sobre el significado de dieta, sueldo o remuneración —siendo esta última la expresión que usa el texto constitucional— porque es múltiple la interpretación que de este asunto se ha dado en diversos países del mundo: no solamente si la dieta significa un sueldo, sino la forma como debe computarse para remunerar a los señores legisladores el tiempo que distraen en la atención de la cosa pública durante el desempeño de sus funciones, o para trasladarse desde sus provincias a la sede del Parlamento.

No es el caso de entrar en tales disquisiciones, pero sí creo que no puede quedar en el aire una expresión vertida así, en el recinto, por el señor diputado, como único fundamento de su agregado, en el sentido de que la dieta no constituye un sueldo. La dieta no constituirá un sueldo desde el punto de vista del significado gramatical del vocablo, pero es evidente que la dieta, como se le llama aquí, es la remuneración de que habla la Constitución, la misma remuneración que con el nombre de sueldo perciben los empleados que prestan sus servicios en cualquiera de las ramas de la administración pública.

Lo cierto es que la dieta, que según el criterio del señor diputado no es sueldo para el pago del impuesto a los réditos, ingresa al patrimonio de los legisladores y también entra a computarse a los efectos de la jubilación.

A este bloque le parece que la aceptación de la proposición formulada por el señor diputado por Santiago del Estero significaría una irritante injusticia, considerado este asunto de la dieta de los legisladores en relación con las remuneraciones que perciben por el desempeño de sus funciones, cualesquiera que ellas sean, en cualquier parte del país, las personas que presten servicios en la administración pública.

Llamo la atención de los señores diputados sobre la falta de necesidad de esta disposición que pretende incorporarse y sobre la conveniencia de que el Parlamento actúe con suma prudencia cuando se trate de asignar ventajas, beneficios o privilegios a sus integrantes. Se ha votado el presupuesto general de la Nación y ha

pasado a ser ley el aumento de las dietas de los legisladores nacionales a 2.500 pesos, y anda flotando en el ambiente y ya ha tenido forma legislativa, un proyecto sobre concesión de pases en las líneas aéreas a los señores diputados. Yo creo, señor presidente, que aumento de dietas, pases en líneas aéreas y exención del pago del impuesto a los réditos que corresponda al monto de las dietas que percibimos los legisladores, irá colocando a los representantes del pueblo argentino en una situación de excepción frente a todos los hombres que en una u otra forma, en uno o en otro lugar del país, prestan en la medida de sus fuerzas y de su capacidad meritorios servicios al Estado.

En nombre del sector de la Unión Cívica Radical, vamos a votar en contra de que se exima del pago del impuesto a los réditos a las dietas de los legisladores y, desde ya, solicito en nombre de mi tal grupo parlamentario, que la votación que sobre este asunto se practique sea tomada en forma nominal.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Benítez. — Para salvar algunos de los reparos que ha hecho el señor diputado y sin entrar a discutir si la dieta es un sueldo o una retribución de gastos —dentro del concepto fiscal de Estados Unidos se ha entendido que gran parte de la dieta es una retribución de gastos— me permito hacer un agregado a la proposición presentada por el señor diputado Montes de Oca para salvar la situación de las personas que quieran contribuir, y que consiste en lo siguiente: «salvo la declaración expresa en contra del interesado». De modo que quedaría redactada, la proposición, en estos términos: «Las dietas de los legisladores, salvo la declaración expresa en contra del interesado.»

Sr. Visca. — En esa forma, cada cual obrará de acuerdo a su conciencia.

Sr. López Serrot. — Se vendría a establecer un régimen excepcional en materia impositiva porque, mientras algunos son contribuyentes, otros podrían elegir entre pagar o no pagar el impuesto. Los legisladores se asignarían la facultad o el privilegio de pagar o no pagar el impuesto, según fuera su voluntad.

Sr. Benítez. — Los señores jueces de la Nación no están sujetos a este impuesto, pero podrían contribuir también voluntariamente.

Sr. López Serrot. — En el caso de los jueces la exención está basada en la Constitución nacional, que dispone que no se les puede reducir el monto de sus remuneraciones.

Sr. Benítez. — Es lo mismo para los legisladores.

Sr. López Serrot. — No, señor diputado.

Sr. Benítez. — Pido que se vote.

Sr. Presidente (Guardo). — La Presidencia desea saber si la comisión acepta el agregado que propone el señor diputado por la Capital.

Sr. Fernández (H. S.). — La comisión acepta.

Sr. Visca. — Que la votación sea nominal.

Sr. Presidente (Guardo). — La Presidencia desea saber si la proposición de votación nominal está suficientemente apoyada.

— Resulta suficientemente apoyada.

— Se llama para votar.

Sr. Baulina. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guardo). — Se está votando señor diputado.

Sr. Baulina. — Se está llamando para votar.

Considero que el agregado que se propone, lejos de mejorar la situación y poder aliviar de escrúpulos, la agrava, porque crea el privilegio especial para los señores legisladores de someterse o no someterse al gravamen según sea su voluntad. Con este agregado que se ha propuesto, lejos de que la carga provenga de la ley, tendrá su origen en la simple voluntad del presunto contribuyente. Esto es técnicamente un error, algo que ha de injertarse en nuestro sistema rentístico como una verdadera novedad: la categoría de contribuyente voluntario. Según el agregado, en el momento en que la dieta ingresa al patrimonio — sea que se la considere honorario o sueldo o una forma de indemnización — el que la percibe puede hacer la contribución del gravamen si lo desea, por su propia voluntad...

Sr. Graña Etcheverry. — Por eso ha hecho su moción el señor diputado Benítez.

Sr. Baulina. — ...estableciéndose un sistema distinto al de todos los demás contribuyentes del país. No puede existir en ninguna parte un régimen impositivo que deje su efectividad librada a la conciencia del propio contribuyente.

Sr. Benítez. — El asunto no es como lo plantea el señor diputado. Es un problema sencillo y que está de acuerdo con el régimen general del impuesto a los réditos.

He sostenido, y lo ha admitido la proposición del señor diputado Montes de Oca, del concepto de que la dieta es en gran parte una retribución de gastos. Pero dentro del impuesto a los réditos es el propio contribuyente que invoca sus gastos y por tanto hacerlo o no hacerlo. De manera, que si el contribuyente — en este caso el señor diputado — entiende que no ha realizado ningún gasto, dirá honradamente a Impuestos a los Réditos que no se le descuenta, porque no ha hecho el gasto. El problema no tiene, pues, el carácter de extraordinario y de raro; y aunque lo tuviera, no sería nada risible empezar de una vez las cosas que nunca se han hecho. Pero no es éste el caso, sino el juego normal, los procedimientos establecidos por las leyes de impuestos a los réditos.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar el inciso 1) con la redacción propuesta por el señor diputado por la Capital.

— Practicada la votación nominal:

Sr. Secretario (González). — Sobre un quórum de 82 señores diputados, han votado 49 por la afirmativa y 33 por la negativa, en la siguiente forma:

— Votan por la afirmativa los señores diputados: Alvarez (J. D.), Alvarez (N.), Alvarez Pereyra, Allub, Antille, Arévalo Cabeza, Arias, Ayala López Torres, Barreiro, Benítez, Braga, Brugnerotto, Cámara, Casal, Casas Noblega, Colom, Corvalán, Degreef, de la Torre, Díaz, Díaz de Vivar, Dri, Fernández (B. S.), Fernández (H. S.), Ferrando, Fre-grossi, Garaguso, Garay, García Quiroga, Graña Etcheverry, Lareo, Letamendi, Mariategui, Martínez Luque, Montes de Oca, Osinalde, Perea, Petruzzi, Raña, Rodríguez (N. M.), Rossi, Rumbo, Saravia, Sarmiento, Sarraute, Sustaita Seeher, Tesorieri, Velloso Colombres y Visca.

— Votan por la negativa los señores diputados: Aráoz, Balbin, Baulina, Bertini, Busaniche, Calcagno, Candiotti, Córdova, Cufre, del Carril, del Mazo, Dellepiane, Díaz Colodrero, Fajre, Ferrer, Frondizi, Galvagni, González Funes, Liceaga, López Serrot, Mac Kay, Maineri, Mántaras, Martínez Guerrero, Mujica, Pastor, Pontieri, Pueyrredón, Ravignani, Rojas (A.), Rubino, Santander y Zanoni.

Sr. Benítez. — Pido la palabra.

Propongo como agregado m) al artículo 19, el siguiente: «Quedan exentas del pago del impuesto a los réditos y de todo otro impuesto nacional las asociaciones deportivas y de cultura física y los inmuebles de su propiedad en que funcionen sus campos de deportes, instalaciones inherentes a sus fines y sedes administrativas y/o sociales, siempre que las mismas no persigan fines de lucro, exploten o autoricen juegos de azar y/o cuyas actividades de mero carácter social primen sobre las deportivas, conforme a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, condonándose las deudas y multas impuestas por falta de pago de los impuestos mencionados.»

En esta forma quedan equiparadas las asociaciones deportivas a las de bien público, que por el artículo 19 están exentas del pago del impuesto a los réditos.

Sr. Presidente (Guardo). — ¿Lo propone en nombre de la comisión?

Sr. Benítez. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Guardo). — Está en consideración el agregado propuesto por el señor diputado Benítez, en nombre de la comisión.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 54 votos; votan 80 señores diputados.

Sr. Presidente (Guardo). — Se dará al encabezamiento del punto 4º la redacción concordante con las votaciones producidas.

—Asentimiento.

—Sin observación se dan por aprobados los puntos 5 a 17 del artículo 1º y el artículo 2º, puntos 1 a 8.

—En consideración el punto 9 del artículo 2º del proyecto de ley.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — El artículo 113 a que se hace referencia en este punto, ha sido modificado por la comisión; la modificación figura en la página 2.655 del orden del día, en la parte del despacho de la comisión que precede al texto del proyecto de ley.

Sr. Presidente (Guardo). — Si no se hace observación, se dará por aprobado el punto 9 del artículo 2º del proyecto de ley, en la forma aconsejada por la comisión.

—Se da por aprobado.

—En consideración el punto 10 del artículo 2º.

Sr. Benítez. — Pido la palabra.

Como el punto prevé que los infractores podrán eximirse de los recargos y multas siempre que espontáneamente se presenten y paguen el impuesto correspondiente antes del 31 de diciembre de 1946, fecha que ya ha vencido, propongo que ese plazo ya vencido se amplíe hasta el 30 de junio de 1947, substituyéndose las palabras «antes del 31 de diciembre de 1946» por «antes del 30 de junio de 1947».

Sr. Fernández (H. S.). — La comisión acepta.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar el punto 10 del artículo 2º con la modificación propuesta por el señor diputado por la Capital y aceptada por la comisión.

—Resulta afirmativa de 64 votos; votan 80 señores diputados.

—Sin observación se da por aprobado el artículo 3º.

El artículo 4º es de forma.

Sr. Presidente (Guardo). — Queda sancionado el proyecto de ley.

8

DISTRIBUCION DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO A LOS REDITOS

Sr. Presidente (Guardo). — Continúa la consideración del artículo 4º del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el pro-

yecto de ley sobre modificación del régimen de distribución de lo recaudado en concepto de impuesto a los réditos (1).

Sr. Ravignani. — Pido la palabra.

En realidad había pedido la palabra en momentos en que se levantaba la sesión pasada, en que hiciera uso de la palabra el señor diputado por la mayoría doctor Albrieu, a propósito de una disposición incluida en este artículo 4º en que se plantea un problema de índole constitucional que considero de capital importancia y que enunciaré brevemente en estos instantes porque algún día tendremos que hacer el gran debate de fondo sobre el avance continuo de la Nación sobre las autonomías provinciales claramente establecidas en los pactos que dieron origen a la Constitución y en el artículo 104 de nuestra carta fundamental.

Quiero referirme, recogiendo las razones enunciadas por el señor diputado Albrieu, al párrafo final del artículo 4º que consideramos. Recordarán los señores diputados que en este artículo se establecen taxativamente las obligaciones que deben cumplir las provincias; sin embargo, en la parte final del mismo artículo existe una sanción que considero inconstitucional, y algo más, considero que afecta el prestigio de las instituciones provinciales y, por consiguiente, el prestigio de la entidad provincia.

En dicho parágrafo se dice: «El Poder Ejecutivo podrá suspender la participación que corresponda a los gobiernos, cuando éstos no cumplan con las presentes disposiciones.» Con esta disposición, a la que voy a referirme brevemente del punto de vista de la doctrina constitucional, creo que el Congreso de la Nación y también el Poder Ejecutivo subordinan la entidad provincial, la rebajan no sólo en el orden institucional sino también en el orden moral, porque existen numerosos procedimientos para establecer relaciones entre el gobierno de la Nación y las provincias a los efectos del cumplimiento de las leyes. Pero establecer una sanción de esta índole es facultar al gobierno federal para que tenga bajo la férula de su acción administrativa a los gobiernos provinciales. Creo, señor presidente, que hemos ido disminuyendo en forma gradual la jerarquía de la entidad provincia como institución. En el orden impositivo la vamos reduciendo a una sombra de la realidad institucional.

Me permito —y discúlpese que lo haga un diputado por la Capital Federal— llamar a la conciencia de los señores diputados de provincias, que forman mayoría en este Congreso, para que defiendan no solamente las institucio-

(1) Véase el despacho en la página 658 de este tomo del Diario de Sesiones.